

# ALINEANDO EL FINANCIAMIENTO VERDE CON LA POLÍTICA AGROPECUARIA: DE LOS COMPROMISOS GLOBALES A LAS SOLUCIONES LOCALES

## Autores

Valeria Piñeiro, Jorge Armando Rueda, Cecilia López, Fernando Henao, Jorge Andrés Lozano, Camilo Bohórquez y Carolina Borda.

## Contexto global

La producción agropecuaria mantiene una relación continua y recurrente con los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad y clima) que sostienen los procesos ecológicos fundamentales para la productividad. Factores como la fertilidad del suelo, el manejo hídrico, la polinización, el control de plagas y la resiliencia climática constituyen pilares para la estabilidad del rendimiento agrícola (FAO, 2024; Purvis, y otros, 2019). Sin embargo, las presiones por el uso intensivo del suelo, la deforestación y la pérdida de diversidad biológica debilitan la capacidad de los ecosistemas para proveer los servicios ambientales que sustentan la producción agrícola, pecuaria y forestal. Se estima que el 95% de los alimentos producidos a nivel mundial dependen del suelo como medio de producción (FAO, 2015). No obstante, el 33% de los suelos presenta signos de degradación moderada o severa (FAO, 2024).

Las transformaciones ambientales globales aumentan las presiones sobre la actividad agropecuaria, al interactuar de forma sistémica y bidireccional con los factores biofísicos y socioeconómicos. A esto se suma una demanda mundial de alimentos en constante crecimiento, impulsada por el aumento de la población, los cambios de patrones de consumo y la urbanización acelerada (Béne, y otros, 2019). En este contexto, los efectos asociados a la creciente variabilidad del clima —como el incremento de las temperaturas, los cambios en los patrones de precipitación y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos— impactan en la productividad agropecuaria (Mirzabaev, y otros, 2023). Para los millones de productores rurales cuya subsistencia depende de estas actividades, estas presiones com-

binadas reducen su estabilidad económica y aumentan su vulnerabilidad ante eventos climáticos y shocks en los mercados. De hecho, se estima que 3,83 mil millones de personas, algo más de la mitad de la población mundial, dependen para sus medios de vida, al menos en parte, de los sistemas agroalimentarios (Davis, y otros, 2023). Esta situación ha contribuido a una disminución estimada de entre el 2% y el 5% en los rendimientos globales de los cereales, así como a la reducción de la productividad total de los factores en un 21 por ciento desde 1961 (Ortiz-Bobea, Ault, Carrillo, Chambers, & Lobell, 2021). De mantenerse esta tendencia, las alteraciones ambientales y climáticas incrementarían el riesgo de inseguridad alimentaria, que podría afectar a cerca de 440 millones de personas<sup>1</sup> a nivel mundial (Hasegawa, y otros, 2021; Fanzo, y otros, 2025).

El reconocimiento de la interdependencia entre la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y las alteraciones globales en las condiciones ambientales ha impulsado el diálogo internacional orientado a abordar de manera integral los desafíos del desarrollo sostenible. La suscripción de los compromisos del Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNUCLD) y la Agenda 2030 ha permitido consolidar un marco normativo coherente y complementario para la acción global. El Acuerdo de París establece la arquitectura internacional para la mitigación y adaptación climática, y a través de instrumentos como el Programa de Trabajo sobre Transición justa (JTWP, por sus siglas en inglés), incorpora la necesidad de orientar estos procesos de transformación hacia un desarrollo socialmente inclusivo, que permita garantizar los cambios estructurales hacia economías bajas en emisiones y resilientes aseguren empleos dignos, medios de vida estables y oportunidades para todas las personas; por su parte, la CDB promueve la conservación, restauración y el uso sostenible de la biodiversidad; y, la CNUCLD busca alcanzar la neutralidad en la degradación de la tierra para 2030. De manera convergente, estos acuerdos encuentran un marco común en la Agenda 2030 con su principio rector de “no dejar nadie atrás”, siendo un horizonte integral para promover la sostenibilidad ambiental, social y económica en beneficio de las generaciones presentes y futuras (United Nations, 2015a).

En este marco, la implementación de los compromisos internacionales requiere la alineación de las estrategias de financiamiento global para impulsar la transición justa hacia sistemas productivos sostenibles. Para lo cual, el financiamiento verde es el principal instrumento para movilizar recursos destinados a incorporar las externalidades ambientales y reducir la percepción del riesgo de las inversiones sostenibles (Daggers, Hannant, & Jay, 2023; FAO, 2025). Este enfoque promueve la articulación de los actores del ecosistema financiero —gobiernos nacionales y locales, bancos de desarrollo multilaterales y nacionales, el sector privado, las instituciones de crédito agropecuario, las aseguradoras y los inversionistas institucionales— con el propósito de escalar las inversiones orientadas a la sostenibilidad (Das & Cungu, 2023).

En 2023, los recursos para el financiamiento climático ascendieron a los USD\$ 1,9 billones (CPI, 2025), reflejando un avance en la consolidación del ecosistema financiero climático global. Este proceso se ha fortalecido mediante la constitución de fondos multilaterales como el *Global Environmental Facility* (1992), que apoya la implementación de tratados ambientales internacionales; el *Adaptation Fund* (2008), orientado a financiar proyectos de adaptación en países vulnerables; el *Climate Investment Fund* (2008), que promueve proyectos de tecnología limpia y resiliencia climática; y el *Green Climate Fund* (2010), que proporciona recursos y asistencia técnica para mitigación y adaptación al cambio climático. De igual forma, plataformas como el *SDG Invest* han facilitado la canalización de inversiones privadas hacia proyectos sostenibles y climáticamente responsables (Das & Cungu, 2023). Recientemente, en el marco de la COP 30, desarrollada en Belém do Pará - Brasil, se realizó el lanzamiento del primer bono de resiliencia en América Latina y el Caribe por USD\$ 100 millones, por parte del Banco de Desarrollo

de América Latina y el Caribe –CAF y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres –UNDRR (CAF, 2025).

A pesar de esto, solo el 7,2 por ciento de estos recursos se destina al sistema agroalimentario; de este monto, el 41 por ciento se dirige a los sistemas productivos agrícolas y pecuarios —enfocados en proyectos de energía y biomasa—; el 11 por ciento a la pesca y acuicultura y el 11 por ciento a la silvicultura enfocado a procesos de mitigación (forestación, reforestación y bioenergía), lo que evidencia la necesidad de incrementar la financiación de iniciativas agropecuarias sostenibles, dada su relevancia para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la sostenibilidad del sistema agroalimentario (CPI, 2025; CLIC, 2025).

Entre los principales retos —a nivel global— se encuentra lograr la alineación entre las iniciativas internacionales y la implementación a nivel nacional. En este sentido, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y las Estrategias de Desarrollo a largo plazo con bajas emisiones (LT-LEDS, por sus siglas en inglés) establecidas en el Acuerdo de París, constituyen instrumentos mediante los cuales los países han traducido sus compromisos climáticos en metas concretas, al reconocer las responsabilidades comunes pero diferenciadas por su contexto (UN, 2015b). Sin embargo, no han alcanzado el impacto esperado debido a las diferencias en la planificación, donde las necesidades globales para la transformación son superiores a las metas definidas a nivel nacional; financieras, para lograr cumplir los objetivos propuestos, debido a que se requiere una inversión superior a 40 veces de lo considerado actualmente; y, de información, al presentar ausencia de datos sectoriales detallados y homogéneos, lo que limita la capacidad de seguimiento y las estrategias de inversión (CPI & FAO, 2025; LEDS LAC, 2023).

## **Perspectiva regional: América Latina y el Caribe**

La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha mostrado avances en la formulación y expedición de políticas públicas verdes para el sector agropecuario, como respuesta a los compromisos del Acuerdo de París y sus respectivas NDC. En este proceso, Brasil fue el primer país de la región con la aprobación de la Ley Nacional de Cambio Climático<sup>2</sup>. Posteriormente, México (2012)<sup>3</sup>, Colombia<sup>4</sup> y Perú<sup>5</sup> (2018), Argentina (2019)<sup>6</sup> y Chile (2022)<sup>7</sup> aprobaron leyes, marcos o directrices con objetivos similares (Aguilar & Recio, 2013; Climate Bonds Initiative, 2019).

De forma paralela, los países de la región han avanzado en la implementación de planes y programas que establecen acciones, estrategias y metas para la sostenibilidad del sector agropecuario. Como es el caso de Brasil, con el Programa Plan de Agricultura Baja en Carbono (Plan ABC+), que impulsa la agricultura baja en carbono a través de prácticas sostenibles como la recuperación de pasturas y el manejo eficiente del suelo. En Colombia, el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial fomenta medidas específicas de mitigación y adaptación, al integrar sistemas de pagos por servicios ecosistémicos para incentivar prácticas agrícolas responsables. En México con el programa “Sembrando Vida Verde”, que orienta la adopción de agricultura climáticamente inteligente. Chile con los sistemas de asesoría técnica y tecnológica innovadora de riego. Costa Rica con la Política Agrícola 2023-2032, enfocada en la producción resiliente y el acceso a servicios de seguro agrícola. Y, en Perú y Argentina que implementan incentivos fiscales y planes sectoriales que fomentan la agroecología y la reducción de emisiones.

De manera específica, aproximadamente el 75 por ciento de los países de ALC tiene o está desarrollando una estrategia de financiamiento climático (BID, 2024) y con el propósito de garantizar que los

recursos movilizados se destinen efectivamente a las actividades sostenibles, varios países de la región han desarrollado taxonomías verdes, instrumentos que permiten identificar las actividades económicas que pueden ser consideradas ambientalmente sostenibles, y establecer criterios de elegibilidad, cuantificación, seguimiento y priorización del financiamiento verde. Estas taxonomías contribuyen a reducir el riesgo de “*greenwashing*”, fortalecen la trazabilidad de las inversiones y promueven la alineación de los flujos financieros con los objetivos de mitigación, adaptación y conservación (UNEP, 2023).

En la región, los avances en la implementación de taxonomías verdes con un enfoque agropecuario evidencian el esfuerzo por orientar el financiamiento hacia sistemas productivos sostenibles. [Chile](#), [Colombia](#), [Costa Rica](#), [México](#), [Panamá](#) y [Paraguay](#) han desarrollado e implementado taxonomías que involucran la agricultura, la ganadería y la silvicultura; además, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú se encuentran en proceso de desarrollo. Por su parte, Argentina, Bolivia y Uruguay han anunciado planes para su expedición. En el Caribe y Centroamérica, países como Antigua y Barbuda, Barbados, Belice y Nicaragua, entre otros, se apoyan en taxonomías regionales como las del [CARICOM](#) o del [Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras Instituciones Financieras \(CCSBSO\)](#), lo que permite armonizar criterios y generar sinergias a escala subregional (GFLAC, 2025).

Un caso de referencia a nivel nacional es el Plan ABC+ de Brasil, que incorpora mecanismos financieros innovadores como los créditos agropecuarios condicionados al desempeño ambiental, que complementan los instrumentos de mercado existentes. Lanzado en 2010 y actualizado en 2020, este programa ofrece tasas preferenciales (entre el 5-7 por ciento anual) a productores que adopten prácticas verificadas de agricultura baja en carbono, como son la recuperación de pasturas, sistemas silvopastoriles y el manejo eficiente del suelo. Entre 2010 y 2020, el Plan financió la adopción de tecnologías en más de 52 millones de hectáreas y benefició a 85 mil productores rurales, lo que contribuyó a evitar la emisión de cerca de 170 millones de toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente. (MAPA, 2012). No obstante, el programa enfrenta desafíos, particularmente en la verificación de las prácticas implementadas y en el seguimiento posterior al crédito. Entre los principales habilitadores para lograr su desempeño se encuentran los apoyos no financieros, como son la asistencia técnica y el acompañamiento territorial, que mejoraron los resultados económicos y ambientales, al facilitar la adopción de tecnologías y fortalecer la capacidad de gestión de los productores (Oliveira, Souza, & Assunção, 2024).

En este contexto, el fortalecimiento de los mecanismos de Monitoreo, Verificación y Reporte (MVR) constituye un componente esencial para consolidar los avances del financiamiento verde en el sector agropecuario. Estos sistemas permiten dar seguimiento a la implementación de las prácticas sostenibles, y evaluar la efectividad de la condicionalidad ambiental como una herramienta de gestión del desempeño, lo que permite sobrepasar el enfoque centrado en recursos asignados a indicadores efectivos de sostenibilidad ambiental. La integración del MVR en las estrategias de financiamiento climático refuerza la credibilidad, la trazabilidad y la rendición de cuentas de las inversiones verdes, que contribuye a que los resultados sean tangibles a la sostenibilidad ambiental y al cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales (Corfee-Morlot, Guay, & Larsen, 2009).

Adicionalmente, para contribuir al impacto ambiental es necesario garantizar el uso sistemático de la evidencia y los datos generados, que permita conectar las metas con las estrategias financieras climáticas a nivel nacional, y revisar los mecanismos de toma de decisiones —en el ciclo presupuestal— para lograr certificar que el gasto público esté alineado con las metas establecidas en las NDC (BID, 2024).

---

## Síntesis de evidencia global con perspectiva para Colombia. Experiencias internacionales sobre programas de crédito agropecuario con condicionalidad ambiental

FINAGRO ha incorporado criterios ambientales en algunos de sus programas crediticios —como la Línea de Transformación Productiva y Sostenible (LTPS)— para impulsar un crecimiento agropecuario más sostenible. Sin embargo, muchos productores aún no acceden a estos instrumentos debido al desconocimiento sobre su funcionamiento y retornos, así como a barreras administrativas y económicas. Identificar estos factores es clave para mejorar la efectividad de los créditos condicionados. La evidencia internacional destaca tres elementos esenciales para su éxito: fortalecer la institucionalidad, reducir costos de transacción y promover la asociatividad.

En el marco de Avanzar2030, se realizó una síntesis de evidencia sobre crédito agropecuario condicionado a criterios de sostenibilidad (Piñeiro, y otros, en prensa), analizando su cobertura geográfica, instrumentos financieros utilizados, resultados ambientales, económicos y sociales, y los factores que facilitan o limitan su implementación.

### Principales hallazgos:

- **Cobertura:** La evidencia proviene sobre todo de países en desarrollo, especialmente Brasil y China.
- **Instrumentos:** El mecanismo más frecuente es la tasa de interés subsidiada o descontada por gobiernos u organizaciones participantes.
- **Resultados:** Los estudios se enfocan principalmente en impactos ambientales (conservación, reducción de agroquímicos) y en menor medida en resultados económicos. No se identifican evaluaciones sobre sostenibilidad social.
- **Factores condicionantes:**
  - *Habilitadores:* Sistemas de monitoreo, reporte y verificación reducen asimetrías de información y facilitan la adopción de prácticas sostenibles; la asociatividad de productores mejora el acceso al crédito.
  - *Barreras:* Alta carga administrativa, débil articulación institucional y elevados costos de transacción para los beneficiarios.

### Consideraciones para Colombia

- **Evaluaciones de impacto:** La mayoría de estudios son cualitativos; se requiere promover análisis cuantitativos tipo evaluación de impacto, que identifiquen los efectos causales sobre las condiciones de sostenibilidad (ambiental, económica y social) de los programas crediticios con condicionalidad.
- **Fortalecimiento institucional:** Fortalecer el ecosistema que involucra a las autoridades, entidades financieras y productores, para mejorar la comunicación, la confianza y el reconocimiento del retorno esperado de los programas.
- **Reducción de costos de transacción:** Simplificar trámites y minimizar cargas económicas y de tiempo para los beneficiarios, dado su impacto en la actividad agropecuaria.
- **Fomento de la asociatividad:** Apoyar la organización de pequeños productores en asociaciones, ya que individualmente enfrentan mayores barreras de acceso al crédito por falta de colateral y alta percepción de riesgo por parte de las instituciones financieras.

## Perspectiva Nacional: Colombia

En la última década, el sector agropecuario en Colombia se ha consolidado como una de las principales actividades económicas generadoras de valor agregado, con una participación del 10,3 por ciento en 2024 —con un incremento de 3,7 puntos porcentuales— (DANE, 2025a). Además, demandó el 14,3 por ciento de la mano de obra (DANE, 2025b), y en 2023 se desarrolló en cerca de 43 millones de hectáreas (DANE, 2025c).

No obstante, este crecimiento se enfrenta a tensiones ambientales derivadas de la expansión de la frontera agropecuaria, la degradación del suelo y la deforestación (WWF, 2024). En 2021, las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron los 302.934 kt CO<sub>2</sub>eq, de las cuales el sector de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra, y la silvicultura aportó el 39,4 por ciento y la agricultura con el 19,1 por ciento (IDEAM, 2024). Lo que refleja la necesidad de avanzar hacia modelos productivos sostenibles que equilibren la competitividad y la sostenibilidad ambiental.

Este desempeño del sector agropecuario se sustenta en el potencial del país, reflejado en la dotación de recursos naturales —que incluye el 15 por ciento de la biodiversidad mundial, amplias reservas de agua, suelos fértiles y altos niveles de radiación solar y velocidad de viento—, la presencia aún de población joven rural (cerca al 26 por ciento), y la diversidad étnica y cultural (OECD, 2022). Sin embargo, persisten brechas estructurales como es la alta informalidad de la tierra (52 por ciento), la insuficiente provisión de bienes públicos rurales, la desigualdad en el acceso a factores productivos (especialmente en la tierra), los bajos rendimientos de los cultivos en comparación con los países competidores (García, Bejarano, Iguativa, & Contreras, 2021; Perfetti, Leibovich, Delgado, & López, 2024), y las desigualdades urbano-rurales, reflejadas en que la tasa de pobreza monetaria rural es 1,6 veces superior a la urbana (DANE, 2025d).

Entre los principales limitantes para avanzar hacia el desarrollo rural sostenible se encuentra: i) la falta de coordinación intersectorial y multinivel, que restringe la alineación e intervenciones públicas entre sectores (como agricultura, ambiente, ciencia y transporte) y las menores capacidades técnicas y financieras de las zonas más rurales para la articulación de las políticas y la pertinencia de la inversión pública en los territorios (OECD, 2022); ii) la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación que limita la generación y adaptación de soluciones tecnológicas a las condiciones específicas de la geografía colombiana (AGROSAVIA, 2025); iii) las barreras en el acceso a los servicios financieros, asociados a los altos costos de transacción, las dificultades de valoración del riesgo de pequeños productores y exposición a riesgos climáticos, lo que reduce la oferta y demanda de créditos agropecuarios, y restringe la inversión en tecnología sostenible y gestión de riesgo (Gáfar-González, y otros, 2025); y, iv) la escasa disponibilidad y limitada calidad de la información rural, evidenciada en registros de hogares incompletos, en la ausencia de sistemas interoperables con otros sectores para complementar la información sobre uso y tenencia de la tierra, y en la falta de mecanismos que permitan identificar los impactos ambientales de las actividades rurales (OECD, 2022).

En respuesta a estas limitaciones, el financiamiento verde puede contribuir a impulsar una transición justa a nivel productivo, siempre y cuando se integre de manera estratégica con la política agropecuaria nacional. La promoción de instrumentos financieros condicionados al desempeño ambiental favorece la coordinación intersectorial entre agricultura, ambiente y hacienda, al canalizar recursos hacia la adopción de prácticas sostenibles y resilientes, así como la conservación o restauración de la biodiversidad (Bonilla, y otros, 2025). De igual manera, los mecanismos de reducción de riesgos —como son las garantías verdes o seguros climáticos— amplían el acceso a crédito para los productores e incentivar la

adopción de tecnologías resilientes; así como la implementación de criterios de MVR, con lo que se fortalece la disponibilidad y calidad de la información rural, que ayuda a mejorar la trazabilidad y efectividad de las inversiones públicas y privadas.

En los últimos años, Colombia ha avanzado en la consolidación de un marco normativo y financiero para la sostenibilidad del sector agropecuario. La Política de Crecimiento Verde de 2018 marcó el punto de inicio al incorporar la sostenibilidad como elemento de la competitividad nacional y promover la eficiencia en el uso de los recursos naturales, la bioeconomía y la producción baja en carbono. Sobre lo cual, la Política Nacional de Cambio Climático estableció las directrices para la gestión del cambio climático en los sectores productivos, y la ley sobre acción climática y las NDC definieron metas específicas de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático, incluido el sector agropecuario. Adicionalmente, el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Sector Agropecuario estableció las metas mediante la incorporación de medidas de mitigación dentro de la planificación agropecuaria, y la política pública de agroecología. De manera complementaria, la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC), la Taxonomía Verde de Colombia (2022) y el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) fortalecen la capacidad del sistema financiero para identificar, clasificar y canalizar recursos hacia actividades sostenibles —incluyendo prácticas agrícolas, ganaderas y forestales— (Noval, 2025).

A nivel nacional, se han implementado programas y proyectos que contribuyen a materializar estos marcos en acciones específicas para el sector agropecuario. La Línea de Transformación Productiva y Sostenible del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) ofrece condiciones preferenciales de crédito para productores que adopten prácticas sostenibles y periodos de gracia flexibles (FINAGRO, 2025A). El Incentivo a la Capitalización Rural otorga un apoyo económico para cofinanciar inversiones nuevas orientadas a mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la reducción de riesgos (FINAGRO, 2025). Los seguros agropecuarios paramétricos buscan activar pagos automáticos entre variaciones climáticas extremas, que reducen los costos de transacción y el riesgo moral, lo que facilita la adopción de prácticas resilientes (PNUD, 2023). El Fondo Colombia Sostenible que canaliza recursos de cooperación internacional hacia proyectos que contribuyen a reducir la deforestación, conservar la biodiversidad y aumentar la resiliencia y el desarrollo rural sostenible, a través del trabajo articulado con gobiernos, sector privado, sociedad civil y las comunidades (Fondo Colombia Sostenible, 2025). Y, el Programa de Paisajes Sostenibles de la Orinoquía, que constituye un mecanismo de financiamiento climático aplicado al sector agropecuario, al integrar la planificación territorial, el monitoreo de emisiones y la adopción de prácticas bajas en carbono, mediante la articulación de la cooperación internacional, las autoridades locales y los productores (Biocarbono Orinoquía, 2025).

## **El futuro inmediato**

En América Latina y el Caribe, la integración progresiva de los compromisos climáticos internacionales en las políticas agropecuarias nacionales ha impulsado la adopción de prácticas favorables a la naturaleza, y el diseño de instrumentos financieros orientados a la sostenibilidad ambiental. No obstante, el reto en el futuro inmediato consiste en consolidar una arquitectura interinstitucional que permita mejorar la articulación de las iniciativas de los diferentes sectores agropecuario, ambiental, hacienda, y los diversos niveles de gobierno. Las limitaciones en la capacidad institucional para implementar programas de manera articulada y sostenible; así como, las inequidades estructurales que entran los productores respecto al acceso a recursos y servicios (Piñeiro, y otros, en prensa).

Para avanzar en la alineación es necesario fortalecer los habilitadores institucionales y operativos que favorecen la movilización y la efectividad de los recursos. Esto requiere promover la flexibilidad de los mecanismos y la adopción del enfoque territorial. Los mecanismos financieros deben permitir compensaciones, reducir los costos de cumplimiento y combinar recursos públicos y privados para aumentar su financiación. Además, la creación de plataformas multiactor que favorecen el codiseño de soluciones adaptadas a los contextos locales y que promueven la apropiación de los productores, así como la mejora en las capacidades organizacionales necesarias para su implementación (Papendieck, y otros, en prensa).

Sin embargo, persisten barreras que restringen la efectividad ambiental del financiamiento verde. La limitada coordinación entre los sectores responsables del diseño e implementación de los incentivos climáticos (agricultura y ambiente) genera instrumentos desalineados con las políticas productivas y reduce su capacidad de escalar. Asimismo, la aplicación insuficiente de los marcos regulatorios y la baja priorización de las agendas ambientales disminuyen la credibilidad y sostenibilidad de los mecanismos (Papendieck, y otros, en prensa). Para superarlas, es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial, garantizar la transparencia y trazabilidad de los programas mediante sistemas de monitoreo, verificación y reporte, e integrar marcos de referencia para orientar las inversiones hacia actividades sostenibles y verificables.

En Colombia, el reto inmediato consiste en traducir los marcos normativos al mismo tiempo que se propician entornos habilitantes para el desarrollo de acciones concretas en el sector agropecuario a nivel territorial. Para ello, es necesario fortalecer los mecanismos de articulación intersectorial y niveles de gobierno, de manera que permitan que las políticas converjan en la promoción de sistemas productivos sostenibles. Iniciativas basadas en una arquitectura institucional de carácter supra-sectorial pueden desempeñar un rol al orientar y priorizar intervenciones que generen impactos verificables en la producción y la sostenibilidad ambiental.

Asimismo, el diseño y escalamiento de los instrumentos de financiamiento verde (créditos preferenciales, garantías verdes o seguros paramétricos, entre otros) deben demostrar su utilidad económica para los productores. Es necesario que las condiciones de acceso sean competitivas frente a los métodos tradicionales. En aquellos casos en que los instrumentos sean percibidos como rentables y accesibles, se contribuye a la adopción de prácticas favorables a la naturaleza. Este proceso debe complementarse con incentivos no financieros, como la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías, que fortalezcan las capacidades locales y generen los co-beneficios económicos y ambientales.

Finalmente, para lograr la alineación entre el financiamiento verde y la política agropecuaria debe conectar las metas globales de sostenibilidad con las realidades y capacidades locales, es necesario reconocer el papel de las comunidades rurales como actores claves en la transición productiva y diseñar esquemas diferenciados, según tipo de productor, que faciliten el acceso al crédito y la inclusión productiva. El fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación permite asegurar que los recursos verdes se traduzcan en resultados observables, y faciliten la canalización de flujos internacionales hacia programas y proyectos específicos que fomenten el desarrollo agropecuario sostenible.

## BIBLIOGRAFIA

BID. (2024). *Estrategias financieras climáticas: Análisis de experiencias Internacionales*. Washington D.C.: Plataforma Regional de Cambio Climático.

Biocarbono Orinoquía. (2025). *Proyecto / Acerca de*. Retrieved noviembre 6, 2025, from <https://biocarbono.org/proyecto/>



- Bonilla, J., Helo, J., Bohórquez, C., Bolívar, D., Rodrigues, M., Morales, C., . . . Piñeiro, V. (2025). Incentivizing Sustainability through Conditional Agricultural Credit: A Systematic Review Protocol. *protocolrxiv.2025.00012, protocolRxiv*.
- CAF. (2025, noviembre 14). *CAF emite el primer bono de resiliencia para América Latina y el Caribe con Apoyo de UNDRR*. Retrieved from CAF / Actualidad / Noticias: <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/caf-emite-el-primer-bono-de-resiliencia-para-america-latina-y-el-caribe-con-apoyo-de-undrr/#:~:text=El%20bono%20de%20resiliencia%20es,el%20bienestar%20de%20las%20personas>
- CLIC. (2025). *Landscape of Climate Finance for Agrifood System 2025*. Retrieved from <https://climateshotinvestor.org/publications/landscape-of-climate-finance-for-agrifood-systems-2025>
- Climate Bonds Initiative. (2019). *América Latina y el Caribe: Estado del mercado de las finanzas verdes 2019*.
- Corfee-Morlot, J., Guay, B., & Larsen, K. (2009). *Financing Climate Change Mitigation: Toward a Framework for Measurement, Reporting and Verification*. Paris: OECD/IEA Climate Change Expert Group Papers. OECD Publishing.
- CPI & FAO. (2025). *The Triple Gap in Finance for Agrifood System*. Rome.
- CPI. (2025, octubre 15). *Global Landscape of Climate Finance Data Dashboard*. Retrieved from Climate Policy Initiative: <https://www.climatepolicyinitiative.org/resources/data-visualizations/global-landscape-of-climate-finance-data-dashboard/#FAQ>
- Daggers, J., Hannant, A., & Jay, J. (2023, diciembre 12). *Systematic Investing for Social Change*. Retrieved from [https://ssir.org/articles/entry/systemic\\_investing\\_for\\_social\\_change](https://ssir.org/articles/entry/systemic_investing_for_social_change)
- DANE. (2025a). *Principales agregados macroeconómicos 2005-2024pr*. Bogotá, D.C.
- DANE. (2025b). *Gran Encuesta Integrada de Hogares*. Bogotá, D.C.
- DANE. (2025c). *Boletín técnico. Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2023*. Bogotá, D.C.
- DANE. (2025d). *Boletín técnico. Pobreza monetaria en Colombia. Año 2024*. Bogotá, D.C.
- Das, P., & Cungu, A. (2023). *Green Finance as a critical lever for delivering sustainable agrifood systems - A global landscape study*. Rome: FAO.
- Davis, B., Mane, E., Gurbuzer, L., Piedrahita, N., Schneider, K., Azhar, N., . . . Winters, P. (2023). *Estimating global and country-level employment in agrifood systems*. Rome: FAO Statistics Working Papers Series, NO.23-34.
- Fanzo, J., Carducci, B., Louis Jean, J., Herrero, M., Karl, K., & Rosenzweig, C. (2025). Climate Change, Extreme Weather Events, Food Security, and Nutrition: Evolving Relationships and Critical Challenges. *Annual Review of Nutrition, 45*, 2.1-2.26.
- FAO. (2015). *Healthy soils are the basis for healthy food production*. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2024). *Policy guidance note: Sustainable soil management - Opportunities and recommendations for decision makers*. Santiago: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2024). *Policy Guidance Note. Sustainable Soil Management. Opportunities and recommendations for decision makers*. Santiago de Chile: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2025). *Transforming food and agriculture through a systems approach*. Rome: FAO.
- FINAGRO. (2025, noviembre 14). *Título 3. Incentivos. Capítulo Primero: Incentivo a la Capitalización Rural - ICR*. Retrieved from Manual de Servicios 2025: <https://www.finagro.com.co/node/134823>
- FINAGRO. (2025A). *Línea de Transformación Productiva y Sostenible. LTPS 2025*. Bogotá, D.C.
- Fondo Colombia Sostenible. (2025). *¿Qué es el Fondo Colombia Sostenible?* Retrieved noviembre 6, 2025, from <https://www.colombiasostenible.gov.co/fondo/>
- Gáfaró-González, M., Guzmán-Finol, K., Poverda-Olarte, P., Granger-Castaño, C., Estrada, D., Salas, V., . . . Bohórquez-Penuela, C. (2025). *Barreras de acceso al crédito a pequeños productores agropecuarios en Colombia*. Revista Ensayos Sobre Política Económica (ESPE).
- García, A., Bejarano, N., Iguatava, J., & Contreras, C. (2021). Una ventana de oportunidad en el sector agropecuario. In *Econometría, Colombia después de la pandemia: La urgencia de lo estructural* (pp. 37-60). Bogotá, D.C.: Econometría Consultores S.A.
- GFLAC. (2025, octubre 15). *Observatorio de Taxonomías de América Latina y el Caribe*. Retrieved from Grupo de Financiamiento Climático LAC: <https://www.gflac.org/taxonomias>
- Hasegawa, T., Sakurai, G., Fujimori, S., Takahashi, K., Hijioka, Y., & Masui, T. (2021). Extreme climate events increase risk of global food insecurity and adaptation needs. *Nature Food, 2*(8), 587-595.
- MAPA. (2012). *Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura*. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
- Mirzabaev, A., Olsoon, L., Kerr, R., Pradhan, P., Rivera, M., & Lotz-Campen, H. (2023). Climate Change and Food Systems. In J. von Braun, K. Afsana, & L. Fresco, *Science and Innovations for Food Systems Transformation* (pp. 511-529). Springer.
- Noval, F. (2025). Cumplimiento de objetivos ambientales. Taxonomía verde de Colombia y SARAS. *Seminario Alineando el Financiamiento Verde con la Política Agropecuaria*. Bogotá, D.C.
- OECD. (2022). *Rural Policy Review of Colombia 2022*. Paris: OECD Publishing.
- Oliveira, W., Souza, P., & Assunção, J. (2024). *The Impact of Brazil's ABC Program Credit on Pasture Recovery: Evidence from the Cerrado*. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative.
- Ortiz-Bobea, A., Ault, T., Carrillo, C., Chambers, R., & Lobell, D. (2021). Anthropogenic climate change has slowed global agricultural productivity growth. *Nature Climate Change, 11*(4), 306-312.
- Papendieck, S., Wirkowski, K., Ortega-Pacheco, D., Franco, C., Illescas, N., Schmidt, E., . . . Chimwaza, G. (en prensa). Identifying incentives and mechanisms designed to support and scale climate action in the agrifood system across Latin America and Caribbean .

- Perfetti, J., Leibovich, J., Delgado, M., & López, E. (2024). *La tierra para uso agropecuario en Colombia: Equidad y productividad*. Bogotá, D.C.: Fedesarrollo.
- Piñeiro, V., Porciello, J., Eber-Rose, M., Smaller, C., Arias, J., McNamara, B., . . . Muñoz. (en prensa). Avanzar2030: Evidence- Pathways for a Sustainable Agrifood Future.
- Piñeiro, V., Rueda, J., Bohórquez, C., Bonilla, J., Helo, J., . . . Savilaakso, S. (en prensa). Environmental Sustainability Outcomes of Conditional Agricultural Credit Programs: A Global Evidence Synthesis with Insights for Colombia.
- PNUD. (2023). *Colombia: El desarrollo del seguro paramétrico*. Bogotá, D.C.
- Purvis, A., Molnár, Z., Obura, D., Ichii, K., Willis, K., Chettri, N., . . . Salimov, R. &. (2019). Chapter 2.2. Status and Trends -Nature. In IPBES, *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services* (pp. Bonn, Germany). IPBES secretariat.
- UN. (2015b). *Paris Agreement*.
- United Nations. (2015a). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. General Assembly. United Nations.
- WWF. (2024, febrero 12). *Los devastadores impactos de la deforestación en Colombia*. Retrieved noviembre 7, 2025, from <https://www.wwf.org.co/?386550/deforestacion-colombia-causas-consecuencias>

<sup>1</sup> Estimación a partir del escenario RCP 8.5, correspondiente a un supuesto de altas emisiones y mayores riesgos climáticos

<sup>2</sup> Ley 12.187 de 2009

<sup>3</sup> Ley General sobre el Cambio Climático

<sup>4</sup> Ley 1931 de 2018 - Directrices para la Gestión del Cambio Climático

<sup>5</sup> Ley 30.754 de 2018 - Ley Marco sobre Cambio Climático

<sup>6</sup> Ley 27.520 de 2019 - Presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al Cambio Climático Global

<sup>7</sup> Ley 21.455 de 2022 - Ley Marco de Cambio Climático

Funding for this work was provided by CGIAR Science Program on Policy Innovations. This publication has been prepared as an output of the Latin America and Caribbean Program and has not been independently peer reviewed. Any opinions expressed here belong to the author(s) and are not necessarily representative of or endorsed by IFPRI.

**INTERNATIONAL FOOD POLICY RESEARCH INSTITUTE**

*A world free of hunger and malnutrition*

**IFPRI is a CGIAR Research Center**

1201 Eye Street, NW, Washington, DC 20005 USA | T. +1-202-862-5600 | F. +1-202-862-5606 | Email: [ifpri@cgiar.org](mailto:ifpri@cgiar.org) | [www.ifpri.org](http://www.ifpri.org) | [www.ifpri.info](http://www.ifpri.info)

© 2025, copyright remains with the author(s). All rights reserved.